

LA LIBERTAD RELIGIOSA Y LA TRADICION DE LA IGLESIA

(I)

Por Rafael GAMBRA

Mi querido y admirado P. Baltasar Pérez Argos me ha honrado en las páginas de VERBO (números 277-278) tratando de rebatir amistosamente las tesis que yo sostuve en una conferencia pronunciada en la Fundación «Francisco Franco» en 1985. Afirmaba yo en ella la contradicción conceptual, e incluso **in terminis**, entre la doctrina que sobre la libertad religiosa sostiene el Concilio Vaticano II y la expuesta en la encíclica dogmática **Quanta Cura** de Pío IX y, en general, en todo el magisterio anterior.

El P. Pérez Argos sostiene que tal contradicción no puede darse, y pretende salvar la continuidad doctrinal en la Declaración **Dignitatis humanae (DH)** por el sencillo procedimiento de suponer un inadecuado empleo del término «libertad religiosa», con lo que, aclarada la impropiedad y subsiguiente ambigüedad, todo quedaría en orden, y aquí no ha pasado nada. Según él, la expresión «libertad religiosa» siempre significó indiferentismo religioso en el orden individual (y neutralismo o laicismo de Estado en el público), al paso que en esa Declaración se lo toma como simple inmunidad de coacción externa en materia religiosa. Cambiando así el sujeto de atribución de toda la Declaración conciliar quedará ésta plenamente aceptable... pero también perfectamente ociosa. De la obligación moral de buscar y acatar la verdadera religión no se trata en este caso: en ello están de acuerdo la tradición y el texto conciliar, al menos en la alvedad que se hace a su término. Tampoco se trata de la mera coacción exterior sobre la conciencia religiosa. El P. Argos dice que «la libertad o inmunidad de coacción extrínseca es exigida por la persona humana no sólo en materia religiosa, sino en cualquier otra materia de la actividad humana». Yo puedo atestiguar que en múltiples sectores de mi vida me veo coaccionado, como en el pago de los impuestos, sin que sea dado exigir una total exención de coacción en este terreno como sería mi gusto y deseo. Es en materia religiosa donde debe exigirse esa inmunidad, y nada habría que objetar en esto al texto conciliar. Ni moral ni físicamente puede obligarse a nadie a creer, ni, consecuentemente, a practicar una práctica religiosa sin previa conversión sería sacrilegia y nada ha herido más la conciencia cristiana de todos los tiempos que la práctica religiosa de falsos conversos.

Si a esto se redujera la Declaración DH, nada habría que oponer, salvo la inanidad de declarar solemne y conciliarmente lo que siempre se ha sabido en la Iglesia. Hubiera bastado con llamar la atención —como tantas veces ha hecho la Iglesia— sobre aquellas prácticas que pueden entrañar una coacción al sobre la práctica religiosa, como las comuniones generales en cuarteles o colegios que a menudo dan lugar a sacrilegio por saberse el sujeto en pecado. (Obsérvese que en este aspecto la Iglesia postconciliar es mucho menos respetuosa con la libertad interna que la preconciliar. La práctica, por ejemplo, de administrar la Comunión durante la misa y sólo en ella puede ser motivo frecuente de declaraciones interconyugales o públicas en ambientes reducidos donde todos se conocen).

Pero el texto dice mucho más que aquello. Explica en términos meridianos que esa libertad religiosa «consiste» en que todos los hombres deben estar inmunes de coacción tanto por parte de las personas particulares como de los grupos sociales o de cualquier potestad humana, y ello de tal manera que en

materia religiosa ni se oblique a nadie a obrar contra su conciencia ni se le impida que actúe conforme a ella en privado o en público, sólo o asociado con otros, dentro de los límites debidos». Exige también que este derecho —así explicitado— sea reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de forma que se convierta en un derecho civil. (Obstinarse en emplear la razón contra la razón misma, es decir, contra los términos palmarios de un aserto clarísimo es empeño desafortunado, por muy recta que sea la intención que lo guíe.)

El doctor Emilio Silva, sacerdote y decano de una Facultad de Derecho brasileña, en un libro todavía inédito, distingue luminosamente entre **libertad de coacción y libertad de coerción**. La coacción es la violencia ejercida para que el sujeto haga algo; la coerción es la violencia para que el sujeto inhíba la acción o se abstenga de ella. La primera debe existir en el orden religioso; pero, ¿y la segunda? Las prácticas externas, la propaganda exigida o autorizada por cualquier confesión religiosa, ¿deben ser aceptadas en nombre de esa libertad religiosa?

Esta distinción se da en otros órdenes aparte del religioso (no en todos, como he dicho). Por ejemplo, fumar tabaco o fumarlo sin nicotina, o mascar chicle o emplear caramelos sustitutorios son cosas que no pueden mandarse porque se trata de cuestiones personalísimas de gusto y diversión. Pero sí puede y debe la autoridad imponer medidas coercitivas contra fumar en ámbitos reducidos o en hospitales o gasolineras, etcétera. Habrá aquí libertad de coacción pero no de coerción.

La Declaración DH no hace estas distinciones sino que incluye todo en el término coacción, ni distingue entre libertad interna y externa. ¿Cree el P. Argos que es lícito en una declaración de esta trascendencia emplear como sujeto de atribución un término que hasta aquí significó cosa distinta? Como dijo donosamente el Prof. Leopoldo-Eulogio Palacios: por mucho que el lenguaje sea convencional, probad a llamar a una señora jirafa, aunque luego le expliquéis que a tal término le dais el sentido de «flor».

(Continuará en el próximo número)



VALENCIA DESCANSA de SOCIALISMO

El pacto alcanzado «in extremis» por Unión Valenciana y el Partido Popular terminó con doce años de gobierno municipal socialista en Valencia. La nueva alcaldesa, Rita Barberá, señaló como objetivo fundamental de su gestión que Valencia «recupere su propia dimensión, lo que por historia y potencia económica le corresponde en España y en el mundo». En la imagen, Rita Barberá besa la imagen de la Virgen de los Desamparados, Patrona de Valencia.

Navarra espera igualmente por estos días el relevo del socialista Urralburu en el Gobierno autonómico.

CON MATILDE COMO DIRECTORA

La agrupación política que no todos los españoles aplaudimos, pero que a muchos distrae y embelesa, es, sin duda, de claro matiz agnóstico; muchos de los que la integran y secundan aceptarían la posible entrada de la ley de despenalización total del aborto, apoyada desde el sector más «progre» del Ejecutivo, con Matilde Fernández a la cabeza.

De ninguna manera deberíamos nosotros —ninguno que se tenga por católico— dar por bueno el desatino y la desgracia tremenda que supondría el llamado aborto libre. La buena voluntad es patrimonio de muchos, mas siento que no sea de todos. Pues todos debemos ser españoles auténticos, inasequibles al desaliento, y percibir la pena que supone para la nación la quiebra de los valores morales y religiosos.

Suele con frecuencia la ignorancia, más que la mala fe, llamar bien al mal y confundir a veces la libertad con el libertinaje. Este es causa de infortunios para la nación. La ignorancia de

muchos no tiene idea de la realidad de una nación que se va hundiendo moralmente y que muchas cosas buenas están decayendo de forma verdaderamente alarmante.

El pueblo creyente, sencillo y nobilísimo de nuestra España, no contaminado con el «virus» materialista y agnóstico; el pueblo instruido, sufrido y honrado y apóstol, si percibe la grave situación moral por la que atravesamos, y le hace sufrir y entristecerse el estado de inmoralidad y chabacanería que actualmente padecemos.

Todo verdadero católico práctico está en completo desacuerdo con la nueva ley del aborto que se quiere introducir, y se muestra conforme al criterio de la Iglesia, a fin de que todos vivan...

España no lleva hoy buena dirección. Sus directores la llevan a la muerte.

Antonio SANCHEZ-FORTUN